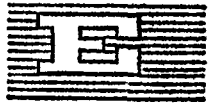


NACIONES UNIDAS  
CONSEJO  
ECONOMICO  
Y SOCIAL



Distr.  
GENERAL



E/CN.4/1986/45  
29 de noviembre de 1985

ESPAÑOL  
Original: INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
42º período de sesiones  
Tema 12 del programa provisional

CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES  
FUNDAMENTALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, Y EN PARTICULAR EN  
LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES

Carta, de fecha 11 de noviembre de 1985, dirigida al Subsecretario  
General de Derechos Humanos por la Oficina Internacional de Trabajo

En su reciente período de sesiones, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías decidió remitir a la Comisión de Derechos Humanos, para que lo siguiera estudiando un Grupo de Trabajo de la Comisión, el proyecto de principios y directrices sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el documento E/CN.4/Sub.2/1985/30.

Adjunto le remito (en francés e inglés) una nota con los comentarios de la Oficina Internacional de Trabajo a esta cuestión, que le agradeceré tenga a bien distribuir a la Comisión de Derechos Humanos.

(Firmado:) K. T. Samson  
Coordinador de Cuestiones  
de Derechos Humanos

Anexo

## COMENTARIOS DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Proyecto de principios y directrices sobre el derecho y el deber  
de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y  
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales  
(documento E/CN.4/Sub.2/1985/30)

1. El proyecto de principios y directrices que figura en el documento E/CN.4/Sub.2/1985/30 suscita una serie de importantes cuestiones de enfoque y de fijación de normas en la esfera de los derechos humanos. Esas cuestiones se refieren, sobre todo, a la relación entre cualquier nueva norma propuesta y los instrumentos internacionales existentes, a la necesidad de distinguir entre obligaciones de las autoridades públicas y responsabilidades impuestas a los individuos y entidades no gubernamentales, al posible efecto sobre los derechos existentes de cualquier declaración general de responsabilidades de los individuos y grupos, y a la posibilidad de dar contenido práctico a los principios en cuestión.
2. Relación con los instrumentos internacionales existentes. Varias disposiciones del proyecto de principios y directrices repiten la enunciación de derechos ya previstos en instrumentos de derechos humanos ya existentes, concretamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en algunas convenciones laborales. En lo que respecta a las esferas que incumben especialmente a la OIT, cabe hacer referencia al principio 31 (relativo al derecho a trabajar) y a los principios 32 y 33 (relativos al derecho de asociación y al derecho a fundar sindicatos y a afiliarse). El proyecto de principio sobre el derecho a trabajar parece basarse en el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero omite la disposición, más detallada, del párrafo 2 del artículo 6 que trata de definir la obligación que tienen los Estados de adoptar medidas para dar efectividad al derecho al trabajo. Ese proyecto de principio es también más limitado que el párrafo 1 del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona "al trabajo", a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo". Las disposiciones relativas al derecho a fundar sindicatos y a afiliarse no tienen el alcance de las que figuran en el artículo 8 del mencionado Pacto (para no hablar de las convenciones de la OIT). Además, a diferencia de ese artículo y del artículo 22 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el proyecto de principio 32 no define limitaciones específicas al derecho a fundar sindicatos y a afiliarse, y el principio 33 parece limitar los derechos de reunión y asociación con referencia a un solo criterio, en contraste con la enunciación de limitaciones, más detallada, de los artículos 21 y 22 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El proyecto de principios y directrices establece, no obstante, una serie de responsabilidades de ámbito general que afectarían también a los principios de que se trata. Esos ejemplos muestran que el texto propuesto parece apartarse en aspectos importantes de las normas internacionales de derechos humanos existentes. Surge, pues, la cuestión de si, en esas circunstancias, ese texto no pone en tela de juicio la continuidad de la validez de las normas anteriores. Entre otros casos en que se plantean cuestiones similares se pueden citar como ejemplo el proyecto de principio 9, relativo a la libertad de expresión en materia de derechos humanos (en comparación con el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), el proyecto de principio 17, sobre el derecho a la vida (en comparación con el artículo 6 del mismo Pacto), y los principios 18 y 37, que contienen algunas garantías de juicio equitativo (en comparación con los artículos 14 a 16 del mismo Pacto).

3. Distinción entre las obligaciones de las autoridades públicas y las responsabilidades de los individuos y de las entidades no gubernamentales. Las autoridades públicas necesitan recurrir en ocasiones a una serie de medidas para asegurar la observancia de los derechos humanos. Tienen que garantizar la existencia de las leyes y reglamentos necesarios, así como la disponibilidad de recursos adecuados en caso de que esas leyes y reglamentos no sean observados. Pueden tener que adoptar medidas estrictas para supervisar las leyes y reglamentos e imponer su observancia, así como aplicar programas eficaces con el fin de permitir el ejercicio de ciertos derechos, como el derecho al trabajo o el derecho a la educación. Además pueden tener que iniciar actividades de promoción con el fin, por ejemplo, de difundir la conciencia de los derechos humanos y garantizar la aceptación y observancia generales de los principios de no discriminación. Esas medidas pueden quedar muy reforzadas con la colaboración de los individuos y grupos, quienes deben gozar de entera libertad para contribuir a la promoción y a la protección de los derechos humanos. Los individuos y las entidades no gubernamentales pueden tener también obligaciones específicas de respeto de los derechos humanos, tales como las obligaciones impuestas a los empleadores de no discriminar en las prácticas o condiciones de empleo y de observar la reglamentación en materia de salarios, horario laboral, higiene y seguridad laboral, etc. Sin embargo, los individuos y grupos no tienen responsabilidades generales comparables a las de las autoridades públicas que se acaban de mencionar.

4. La distinción que antecede no parece haber sido tenida suficientemente en cuenta en el proyecto de principios. Así, pues, cuesta entender cómo se puede exigir de todo individuo, grupo u órgano de la sociedad que promueva y proteja todos los derechos humanos y libertades que figuran en los instrumentos de derechos humanos (principio 4); que se esfuerce por promover, reconocer y proteger universal y eficazmente los derechos humanos (principio 5); que fomente la conciencia de los derechos humanos entre todos los pueblos de la comunidad mundial (principio 10); que se esfuerce, mediante la enseñanza y la educación, por promover el logro de un orden social internacional en el que puedan realizarse plenamente los derechos humanos (principio 19); que se esfuerce por promover, proteger y restablecer el imperio de la ley y los derechos humanos (principio 20); que promueva la observancia de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de las normas del derecho internacional (principio 23), etc., etc.

5. Así, pues, parece necesario reconsiderar los principios propuestos con objeto de distinguir entre las obligaciones que tienen los individuos y grupos de respetar los derechos humanos y las libertades, y la libertad que unos y otros deben tener para emprender las actividades que estimen convenientes con objeto de promover un mayor disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

6. Efecto potencial sobre los derechos existentes de cualquier declaración general de responsabilidades. El principio 6 proclama la indivisibilidad de todos los derechos humanos y el principio 7 establece que los derechos humanos deben ser considerados como un aspecto de la responsabilidad profesional, ética y social (entre otros) en todos los campos de trabajo. El principio 19 afirma que la responsabilidad, al igual que los derechos humanos, deberá considerarse indivisible. Según el principio 50, no sólo los Estados, las autoridades judiciales, las organizaciones gubernamentales, sino los individuos y los grupos de individuos, deberán atenerse a lo dispuesto en los convenios y demás instrumentos aprobados por el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, que se refieran (entre otros) al logro del progreso económico y social. Considerados en conjunto, esos principios suscitan la cuestión de qué responsabilidad se intenta imponer a los individuos en lo que se refiere, por ejemplo, a la realización de los derechos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales. Ese Pacto define ciertas restricciones u obligaciones que afectan a los individuos (por ejemplo, las limitaciones en materia sindical, en virtud del artículo 8; la obligación de castigar el empleo ilegal de niños y adolescentes, en virtud del artículo 10; o la disposición relativa a la enseñanza obligatoria, artículos 13 y 14), pero la obligación de actuar para la realización de los diversos derechos previstos en el Pacto se impone a los Estados Partes, y no a los individuos. Cabe suscitar la cuestión de las obligaciones que impondrían los principios propuestos, por ejemplo, a los empleadores en lo que se refiere a proporcionar empleo con objeto de permitir la realización del derecho de toda persona a trabajar, o de pagar un nivel de salarios determinado, de conformidad con los artículos 6 y 7 del Pacto, o, desde un punto de vista más general, cuál sería la responsabilidad de los individuos en lo que se refiere a garantizar el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y a una mejora continua de las condiciones de existencia o al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículos 11 y 12).

7. Entre otros ejemplos de casos que suscitan cuestiones similares en cuanto a la significación de las normas propuestas en comparación con los instrumentos internacionales existentes figuran los siguientes:

- a) El principio 22 exigiría de todo individuo o grupo la obligación no sólo de tolerar, sino también de respetar, las opiniones políticas y religiosas, etc. de los demás. No está claro en qué medida diferiría o coincidiría esa disposición con las disposiciones mucho más concretas de los artículos 18 a 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tampoco está claro el significado que se quiere dar a la distinción entre tolerar y respetar las opiniones.
- b) El principio 28 exigiría de todo individuo y de toda institución la obligación de contribuir (entre otras) a las relaciones de amistad entre los pueblos y las naciones y a la justicia social. La primera de esas responsabilidades parecería ir más allá de las limitaciones a la libertad de expresión definidas en los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La segunda suscita cuestiones similares en cuanto a la determinación de sobre quién recaería la obligación de garantizar el goce de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas físicas y jurídicas que se mencionan en el párrafo 6 supra.
- c) El principio 38 impondría a todo individuo o grupo la obligación de abstenerse de cualquier tipo de abuso en el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Esta formulación va más allá de las limitaciones que figuran en los artículos 29 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 5 de cada uno de los Pactos de derechos humanos (cuyas disposiciones se recogen en los principios 35 y 39).

9. Factibilidad de dar contenido práctico al proyecto de principios. Aparte de la cuestión general de principio de si sería apropiado imponer a los individuos y grupos la amplia escala de responsabilidades que figura en el proyecto, habría que examinar también cuidadosamente sus disposiciones desde el punto de vista de su factibilidad. Por ejemplo, cabe dudar de si un individuo o grupo puede tener derecho a la libre determinación (principio 8). Tampoco está claro cómo se puede exigir en la práctica a cada individuo o grupo que se esfuerce por reconocer y proteger en forma universal y efectiva los derechos humanos de todos (principio 5), que fomente la conciencia de los derechos humanos entre todos los pueblos de la comunidad mundial (principio 10), que se esfuerce mediante la enseñanza por

promover el logro de un orden social e internacional en el que puedan realizarse plenamente los derechos humanos (principio 19), que se esfuerce por promover, proteger y restablecer el imperio de la ley y los derechos y libertades de todos (principios 20 y 21), que promueva los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, las normas del derecho internacional, etc. (principio 23). Se plantean problemas similares en lo que respecta a los principios 24, 25 (segundo párrafo), 26, 27, 28, 29, 34, 37, 44 y 51.

10. A la luz de los comentarios que anteceden, parecería conveniente realizar un minucioso examen del proyecto de principios y aclarar el propósito que se conseguiría con la aprobación de esos principios. A ese respecto, deberían tenerse en cuenta las consideraciones siguientes:

- a) No parece de mucha utilidad enunciar principios que se limitan a repetir disposiciones que ya figuran en instrumentos internacionales de derechos humanos.
- b) Podría dar lugar a confusión e incertidumbre el enunciar derechos ya reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos mediante formulaciones distintas de las que se encuentran en instrumentos anteriores, a menos que el objetivo evidente de las nuevas disposiciones fuera mejorar la protección que garantizan los instrumentos existentes.
- c) Por lo tanto, sería conveniente orientar cualquier nueva norma hacia el reconocimiento de derechos que todavía no han sido previstos. Por ejemplo, se podría estudiar la adopción de medidas para salvaguardar el establecimiento y funcionamiento de asociaciones y grupos que tuvieran como objetivo la promoción y protección de los derechos humanos (teniendo en cuenta que los derechos previstos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se conceden a individuos). Esas normas se podrían hacer extensivas a las asociaciones y grupos interesados en los derechos de expresión y asamblea, en la no injerencia arbitraria en su vida privada, correspondencia, etc.
- d) Cabe dudar de la conveniencia de adoptar normas internacionales para definir las responsabilidades de los individuos y las entidades no gubernamentales en la promoción y protección de los derechos humanos, que difieran de la inclusión en los instrumentos orientados al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las limitaciones impuestas al ejercicio de esos derechos.

-----